



JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE SINCELEJO

Sincelejo, cuatro (4) de octubre de dos mil diecinueve (2019)

Ref. Ejecutivo
Radicación N°: 70-001-33-33-003-2018-00329-00
Demandante: Rosa Elisa Povea Estrada.
Demandado: Municipio de San Benito Abad.

Asunto: Se libra mandamiento de pago.

La demanda-Título ejecutivo.

La señora Rosa Elisa Povea Estrada, a través de apoderado judicial presentó demanda ejecutiva en contra Municipio de San Benito Abad, con el fin de obtener el pago de la siguiente suma:

- Veintitrés millones quinientos treinta mil ciento setenta y ocho pesos (\$23.530.178), por concepto de las prestaciones y demás emolumentos dejados de pagar por el tiempo en que estuvo vinculada con la entidad demandada.

Para conformar el título ejecutivo la parte ejecutante presentó los siguientes documentos:

1. Copia auténtica de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Sincelejo, de fecha 9 de septiembre de 2013¹.
2. Copia auténtica de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, de fecha 30 de septiembre de 2014².
3. Constancia de ejecutoria de las sentencias relacionadas de fecha 16 de octubre de 2014³.
4. Solicitud de cumplimiento de sentencia⁴.

CONSIDERACIONES:

Revisados los documentos aportados al expediente, se estima que los mismos son suficientes para acceder a decretar el mandamiento de pago, teniendo en cuenta los **siguientes, argumentos:**

De acuerdo con el artículo 422 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, son demandables las "obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su

¹ Folios 7-16 del expediente principal

² Folios 17-22 del expediente principal

³ Folio 23 del expediente principal

⁴ Folios 25-28 del expediente principal

causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una **sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción**, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley".

Con base en la preceptiva transcrita, la jurisprudencia contenciosa administrativo ha inferido que el título ejecutivo debe reunir condiciones **formales y de fondo**, donde los primeros se circunscriben en "documento o documentos éstos que conformen unidad jurídica, **que sea o sean auténticos**, y que emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia", es decir, que esta formalidad del título deviene principalmente de la fuente de la obligación.

Por su parte, las exigencias de fondo apuntan a que en el título conste una **obligación clara, expresa y exigible**, lo que predica la sustancialidad del título, esto es, que lo que pretende ejecutarse tengan unos condicionamientos mínimos sustanciales que permitan al juez avizorar la certeza, literalidad y ejecutividad de la obligación, despojándose de cualquier manto de duda e incertidumbre que conlleve a ejecutar una obligación ausente de esas exigencias, circunstancia proscrita por el ordenamiento procesal.

Siguiendo a la Corte Constitucional, sobre condiciones formales y de fondo o sustanciales, se debe reiterar que

"Los títulos ejecutivos deben gozar de dos tipos de condiciones: formales y sustanciales. Las primeras exigen que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación "(i) sean auténticos y (ii) emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley, o de las providencias que en procesos contencioso administrativos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, o de un acto administrativo en firme." Desde esta perspectiva, el título ejecutivo puede ser singular, esto es, estar contenido o constituido en un solo documento, o complejo, cuando la obligación está contenida en varios documentos. **Las segundas, exigen que el título ejecutivo contenga una prestación en beneficio de una persona. Es decir, que establezca que el obligado debe observar a favor de su acreedor una conducta de hacer, de dar, o de no hacer, que debe ser clara, expresa y exigible. Es clara la obligación que no da lugar a equívocos, en otras palabras, en la que están identificados el deudor, el acreedor, la naturaleza de la obligación y los factores que la determinan. Es expresa cuando de la redacción misma del documento, aparece nítida y manifiesta la obligación.** Es exigible si su cumplimiento no está sujeto a un plazo o a una condición, dicho de otro modo, si se trata de una obligación pura y simple ya declarada"⁵

⁵ Corte Constitucional, sentencia T- 747 de 2013.

En el plano contencioso administrativo, las sentencias que profieran los administradores u operadores de esta jurisdicción, de carácter condenatoria, debidamente ejecutoriadas, pueden tener la condición de título ejecutivo conforme lo estipula el artículo 297 del CPACA, que reza:

"Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias."

En ese orden de ideas, exclusivamente las sentencias ejecutoriadas expedidas por la jurisdicción contenciosa administrativa que consignen el pago de sumas dinerarias (obligación de dar), y contemplen una obligación clara, expresa y exigible, puede ser objeto de ejecución por configurarse en título ejecutivo; debiéndose agregar que, en todo caso la sentencia debe contener una obligación determinada o que sea posible determinar por simples operaciones aritméticas para efectos de cuantificar la obligación a cargo del ejecutado.

Sobre la sentencia como título ejecutivo el Consejo de Estado sostiene:

"Ahora bien, el título ejecutivo que habilita la ejecución forzada puede ser simple o complejo, según la forma en que se constituya. Es simple cuando la obligación consta en un solo documento del que se deriva la obligación clara, expresa y exigible. Y es complejo cuando la obligación consta en varios documentos que constituyen una unidad jurídica, en cuanto no pueden hacerse valer como título ejecutivo por separado.

En materia de lo contencioso administrativo, el proceso ejecutivo sirve para pedir el cumplimiento forzado de las obligaciones a cargo de las entidades públicas que consten, por ejemplo, en los actos administrativos ejecutoriados o en las providencias judiciales.

Por regla general, en los procesos ejecutivos que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo, la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. En el último caso, la acción ejecutiva se promueve porque la sentencia del juez no fue cumplida."⁶

En el presente caso, la ejecutante esgrime como título ejecutivo copia auténtica de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo de fecha 9 de septiembre de 2013⁷ y copia auténtica de la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre del 30 de septiembre de 2014⁸, en las cuales se ordenó al Municipio de San Benito Abad- Sucre, reconocer y pagar a la señora ROSA ELISA POVEA ESTRADA, todas las prestaciones y demás emolumentos dejados de pagar por el tiempo en que estuvo vinculada con la entidad

⁶ Auto de 2 de abril de 2014. Expediente No. 11001032500020140031200. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. C. P. Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE.

⁷ Folios 7-16 del expediente.

⁸ Folios 17-22 del expediente

demandada mediante contrato de prestación de servicios profesionales en virtud de la figura del contrato realidad.

Con fundamento en lo anterior, la accionante al hacer su liquidación de la sentencia a folio 29-35, considera que se le adeuda por del municipio ejecutado, la suma de veintitrés millones quinientos treinta mil ciento setenta y ocho pesos (\$23.530.178).

El inciso primero del artículo 430 del CGP, dispone:

ARTÍCULO 430. MANDAMIENTO EJECUTIVO. Presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal.

El despacho al revisar dicha liquidación para determinar la suma líquida de dinero adeudado, remitió el expediente a la contadora de los Juzgados Administrativos, arrojando como valor de la sentencia, la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESO CON TRES CENTAVOS (\$18.136.716,03)⁹, suma por la cual habrá de librarse la orden de pago forzada.

En razón a los intereses moratorios se establecerá de acuerdo a lo estipulado en el artículo 177 de Código Contencioso Administrativo, toda vez que este proceso fue iniciado bajo el anterior régimen escritural, por tanto las normas aplicar deben ser las vigentes cuando inició el proceso.

"ARTÍCULO 177. Reglamentado por el Decreto Nacional 768 de 1993 Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada.

Inciso. 6º Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma."

De acuerdo a lo anterior, se tiene que la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo de fecha 9 de septiembre de 2013¹⁰ y la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre del día 30 de septiembre de 2014¹¹, quedando debidamente ejecutoriada, según la constancia Secretarial, el día 14 de marzo de 2014¹² y conforme al artículo arriba transcrito, la ejecutante tenía un término de 6 meses a partir de la ejecutoria de la providencia para presentar ante la entidad demandada, solicitud de pago.

En ese hilo, de acuerdo a los documentos anexados al expediente se puede observar que la parte actora presentó su cuenta de cobro en término; esto es el

⁹ folios 41-42 del expediente

¹⁰ folios 7-16 del expediente

¹¹ Folios 17-22 del expediente

¹² folio 24 del expediente

día 10 de abril de 2015¹³, por lo que se reconocerán los intereses moratorios al capital, desde el día siguiente que quedó ejecutoriada la sentencia; esto es desde el día 17 de octubre de 2014, hasta que se pague la totalidad de la obligación.

Así las cosas, de conformidad con el artículo 430 de Código General del Proceso, y en vista que la demanda bajo estudio cumple con los requisitos legales y de los documentos relacionados se deduce la existencia clara, expresa y exigible de la obligación cuya solución se pide (arts. 422 del C.G.P.), se libraré el mandamiento de pago con los intereses, que establece la ley para esta clase de asunto.

En consecuencia **SE, DECIDE:**

PRIMERO: Líbrese mandamiento de pago contra el Municipio de San Benito Abad, a favor de la señora Rosa Elisa Povea Estrada, por el valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESO CON TRES CENTAVOS (\$18.136.716,03), por concepto de las prestaciones y demás emolumentos dejados de pagar por el tiempo en que estuvo vinculada con la entidad demandada.

SEGUNDO: Reconocer intereses moratorios desde el día siguiente que quedó ejecutoriada la sentencia; esto es desde el día 17 de octubre de 2014 hasta que se pague la totalidad de la obligación

TERCERO: La entidad ejecutada deberá cancelar la suma de dinero antes mencionada en el término de cinco (5) días, con los intereses, desde que se hicieron exigibles hasta la cancelación de la obligación, de conformidad con lo previsto en el artículo 431 del CGP.

CUARTO: **Notifíquese personalmente** la presente providencia de conformidad con lo establecido en el artículo 199 del CPACA, a través del buzón electrónico de que disponen para notificaciones judiciales, a la parte demandada, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica. **Para el efecto, enviar copia virtual de la presente providencia y de la demanda.**

QUINTO: **Notifíquese por estado,** la presente providencia a la parte ejecutante.

SEXTO: Poner a disposición de los notificados y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la Secretaría de esta Corporación, copia de la demanda y sus anexos.

SÉPTIMO: En cumplimiento del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012, el demandante deberá remitir de manera inmediata a través del servicio postal autorizado, copia de la demanda y sus anexos y del auto que libra mandamiento de pago a las entidades demandadas y al Ministerio Público.

OCTAVO: El ejecutante deberá aportar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente providencia, certificación de la 4 entidad de servicio

¹³ Folios 25 del expediente principal

postal autorizado, en la que conste la remisión efectiva de la copia de la demanda sus anexos y del auto que libra mandamiento de pago, atrás ordenados. Para el efecto, deberá retirar el oficio remisorio respectivo en la Secretaría de este Despacho Judicial.

NOVENO: Sobre las costas se resolverá oportunamente en la sentencia

DÉCIMO: Se reconoce al abogado CARLOS GONZÁLEZ RUIZ, identificado con C.C. N° 70.111.029 y portador de la T.P. N° 39.590 del C.S. de la J., en los términos del poder conferido¹⁴.

DECIMRO PRIMERO Por Secretaría abrir cuaderno aparte de medidas cautelares, y refoñar el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



CÉSAR ENRIQUE GÓMEZ CÁRDENAS
JUEZ

¹⁴ Folio 24 del expediente